

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA  
SALA UNITARIA

Santiago de Cali, seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 471

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000- <b>2021-00248-00</b>
DEMANDANTE:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. phinestrosa@alianza.com.co jorge.garcia@escuderoygiraldo.com garciacalume@hotmail.com
DEMANDADO:	NACIÓN –FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co proceso@defensajurídica.gov.co
ASUNTO	Proceso ejecutivo para el cumplimiento de condenas judiciales – libra mandamiento de pago

**MAGISTRADO PONETE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT**

Procede la Sala de Decisión de esta Corporación, conforme el numeral 9 del artículo 156 del CPACA, a decidir si se dicta o no mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia.

**I. ANTECEDENTES**

La persona jurídica de derecho privado ALIANZA FIDUCIARIA S.A., actuando de forma exclusiva como administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia C\*C, por intermedio de apoderado, formuló demanda ejecutiva contra LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, buscando la satisfacción de las siguientes **PRETENSIONES:**

Que se libre mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero:

**PRIMERO.-** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$362.047.595.19), correspondiente al capital dejado de pagar por la demanda que consta en la sentencia fechada el 16 de julio de 2015, proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa radicado con el No. 2004-00578-01, debidamente ejecutoriada el día 6 de agosto de 2015.

**SEGUNDO.-** QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS



(\$502.926.508.63), valor correspondiente a los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, esto es desde el día 7 de agosto de 2015, causados sobre el capital indicado en el numeral anterior, hasta el 11 de noviembre de 2020. Que se liquiden los intereses de mora desde el 12 de noviembre de 2020 hasta la fecha de pago de la obligación.

**TERCERO.-** Que se condene al demandado al pago de las costas, las agencias en derecho y demás gastos que se causen dentro del proceso.

Como sustento de sus pretensiones, la parte ejecutante aduce como **HECHOS**, los siguientes:

Que el señor ORLANDO ZÚÑIGA MOSQUERA y otros, presentaron demanda contencioso administrativa de reparación directa contra LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que fue radicada bajo el Número 76001-23-31-000-2004-00578-00. Dicho asunto fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, colegiatura que, mediante sentencia del 27 de noviembre de 2008, impuso condena a cargo de la FISCALÍA y a favor del señor ZÚÑIGA MOSQUERA, como víctima directa, en un monto de 60 SMLMV a título de perjuicios morales.

Que contra la anterior decisión fue interpuesto recurso de apelación que se surtió ante el Consejo de Estado como superior funcional. Esta Corporación, en sede de segunda instancia, profirió sentencia del 16 de julio de 2015, donde modificó la condena impuesta en el primer grado, reconociendo a favor del señor ZÚÑIGA MOSQUERA las sumas de 90 SMLMV a título de perjuicios morales y TRESCIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$304.056.095,19) a título de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante.

El actor explica que, según constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el fallo de segunda instancia quedó debidamente ejecutoriado el día 6 de agosto de 2015.

Que el 30 de octubre de 2015 el acreedor inicial de la condena, el señor ORLANDO ZÚÑIGA MOSQUERA, celebró un contrato de cesión de créditos, en calidad de cedente, con el señor Edward Jaramillo Arenas quien fungió como cesionario. El objeto del contrato sería la cesión, a favor del cesionario, del *"100% de los Derechos Económicos reconocidos al beneficiario"* en la condena explicada en párrafos anteriores.

Que, a su turno, el 30 de octubre de 2015, el señor Edward Jaramillo Arenas suscribió un nuevo contrato de cesión de créditos, esta vez en calidad de cedente, con la sociedad FINANZAS Y SENTENCIAS S.A.S. a través de su apoderado, quien



fungió como cesionaria. El objeto del contrario, igualmente, fue la cesión del 100% de los derechos económicos reconocidos en la sentencia tantas veces citada.

Que esta última entidad, a través de su representante legal, allegó cuenta de cobro a la FISCALÍA el día 6 de noviembre de 2015 bajo el radicado DJ – No. 20156111387282.

Explica el ejecutante que, tiempo después, el 3 de marzo de 2016, se suscribió un último contrato de cesión de créditos, ahora entre la sociedad FINANZAS Y SENTENCIAS S.A.S., como cedente, y la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, en calidad de cesionaria. El objeto de este nuevo contrato sería, igualmente, la cesión a favor del cesionario de los derechos económicos derivados de la plurimentada condena judicial, condena que, se recuerda, consiste en:

Perjudicado	Perjuicios Morales (SMMLV)	Perjuicios Materiales (Lucro Cesante)
Orlando Zuñiga Mosquera	90 SMMLV	\$304'056.095,19
SUBTOTAL	\$57'991.500	\$304'056.095,19
TOTAL	\$362'047.595,19	

Que, en tal medida, los derechos económicos objeto de la presente cesión equivalen a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$362.047.595,19).

Que el día 10 de marzo de 2016 el apoderado de FINANZAS Y SENTENCIAS S.A.S. y la apoderada de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., de forma conjunta, allegaron una comunicación a la FISCALÍA, radicada con el No. DJ – 20166110263602, donde solicitaron que esta entidad aceptara la última cesión, así como la certificación del registro de la cuenta por pagar a favor de ALIANZA FIDUCIARIA. La FISCALÍA respondió de forma favorable la anterior solicitud mediante Oficio del 31 de marzo de 2016 Radicado No. DJ – 20161500018351, reconociendo como única beneficiaria de la condena a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Que la presente obligación no ha sido cancelada pese a ser reconocida por la ejecutada y estar dentro del trámite para el pago con turno asignado. Que este incumplimiento se ha extendido más de 4 años después de iniciado el trámite de pago.

III. CONSIDERACIONES



## DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA<sup>1</sup> establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP<sup>2</sup> establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *"presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal"*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y**

<sup>1</sup> Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

<sup>2</sup> Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.



**material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales. En cuanto a los primeros, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:<sup>3</sup>

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos<sup>4</sup>:

*"El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa "manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender" y expreso lo que es "claro, patente, especificado",<sup>5</sup> conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva."<sup>6</sup>*

*Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de*

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

<sup>4</sup> Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

<sup>5</sup> Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

<sup>6</sup> Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.



*interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.*

Respecto a los elementos formales del título ejecutivo, es de precisar que estos son los que se refieren a los documentos que contiene el respectivo título ejecutivo y a la forma en la que deben aportarse. Es de aclarar que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha entendido que, en los asuntos donde se pretende el cumplimiento de decisiones judiciales a través del proceso ejecutivo, el título que presta mérito no es de los denominados “complejos”<sup>7</sup>; puesto que solo se requiere copia de la sentencia ejecutoriada con la que se reconoció y ordenó el pago de una suma de dinero, ya que es esta la que contiene la obligación expresa, clara y exigible. Al respecto, en sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016,<sup>8</sup> se indicó lo siguiente:

“ (...)

*Por ello, **la sentencia proferida por los jueces administrativos, una vez ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la ejecución de la sentencia, sin que sea necesario que se acompañe o anexe el acto administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia.** Es cierto que la norma citada indica que los actos administrativos expedidos por las entidades de derecho público también constituyen títulos ejecutivos. Pero ello implica, según la interpretación de la Subsección A, que es predicable en cuando que los mismos sean los que crean, modifican o extinguen un derecho. Situación diferente se presenta cuando se trate de actos administrativos de ejecución o expedidos en cumplimiento de la sentencia judicial, porque es ésta última la que declara, constituye el derecho u ordena la condena”*

Así mismo, se determinó que exigir la copia auténtica del acto administrativo que dio cumplimiento al fallo judicial a ejecutar, se constituye en un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”. Con relación a ello, se indicó:

*“Repárese que las resoluciones núm. PAP 039428 del 21 de febrero de 2011 y núm. UGM 010620 de 2011 fueron expedidas por la entidad con el único*

<sup>7</sup> Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, C.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en providencia 14 de marzo de 2019 Radicación número: 25000-23-42-000-2015-02057-01(0044-16).

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez Bogotá, D.C. Sentencia del 18 de febrero de 2016 bajo el número de radicado: 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC) Actor: Flor Maria Parada Gómez Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Posición reiterada en la sentencia de tutela del 3 de agosto de 2017, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, dentro del proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC) « Esta Corporación a través de la Sección Tercera ha señalado que, por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. [...] No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, **no es requisito la copia de los actos administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judiciales para conformar el título ejecutivo.** [...] De la norma anterior [artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos... (i) la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. Ahora bien, según el CPC y el CPACA la sentencia es la providencia que decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista de ejecutividad y ejecutoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida.





*propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en las sentencias citadas, luego, no son actos administrativos que las complementaron o adicionaron y en modo alguno cambiaron lo que en ellas se encuentra ordenado. En consecuencia, no forman parte del título ejecutivo como lo expresó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, a la entidad demandada correspondía demostrar que ya había cumplido la obligación impuesta en las sentencias, para lo cual debía allegar las pruebas que lo demostraran, que en este caso, no son otras que los actos administrativos expedidas en cumplimiento de la sentencia, conforme lo consagrado en el artículo 509 del C.P.C.. Al ordenarse a la parte demandante que allegara copia auténtica de los actos administrativos que dieron cumplimiento parcial a la condena impuesta en la sentencia, es un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cual fundamenta la intervención en sede de tutela.*

***Bajo tal perspectiva, en nada influye dentro del proceso ejecutivo que las mencionadas resoluciones hubiesen sido aportadas en copia simple y en esa medida, al Tribunal correspondía librar mandamiento de pago, puesto que el título ejecutivo estaba conformado por las sentencias que prestan mérito ejecutivo de las cuales surgió la obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad.<sup>9</sup>*** (Negritas fuera del texto).

Entre tanto, en lo que refiere a la forma en que se deben aportar las sentencias que contienen la obligación a ejecutar, es preciso indicar que el artículo 114 del Código General del Proceso dispone:

**"Artículo 114. Copias de actuaciones judiciales.** Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

(...)

**2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria..."** (Negritas por fuera de texto).

Como se puede colegir, las sentencias que se pretenden valer como título ejecutivo, conforme al precitado dispositivo normativo se deben aportar con su respectiva constancia de ejecutoria. Así mismo, el Consejo de Estado, en sede de tutela indicó que "el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, antes citado, no exige que el mencionado documento deba estar en original. En efecto, la norma se limita a señalar que constituyen título ejecutivo "las sentencias debidamente ejecutoriadas (...)", además, "el artículo 244 del Código General del Proceso, establece que "(...) los documentos públicos o privados emanados de las partes o terceros, en original o copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos (...)". Así mismo,

---

<sup>9</sup> *Ibidem*



*dispone que (...)” se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo”.*<sup>10</sup>

De acuerdo con los apartes normativos, doctrinales y jurisprudenciales expuestos, en relación a los procesos ejecutivos derivados del incumplimiento total o parcial de una sentencia judicial, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

1. Prestarán mérito ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se haya condenado a la administración al pago de una suma de dinero.
2. El título ejecutivo en mención debe contener una obligación expresa, clara y actualmente exigible.
3. Las sentencias, junto con su constancia de ejecutoria, pueden ser aportadas al proceso en copia simple, toda vez que se presumen auténticas de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código General del Proceso.
4. No es indispensable aportar la copia o el original del acto administrativo que da cumplimiento a la decisión judicial, toda vez que este no hace parte del título ejecutivo que solo está constituido por las sentencias judiciales que contienen la obligación. De exigirse, el juez incurrirá en un exceso ritual manifiesto.
5. Si bien el acto administrativo que acata la decisión judicial no hace parte del título ejecutivo, este sirve de contraste para determinar si la sentencia fue acatada a cabalidad por parte de la administración.

### **3.2. CASO CONCRETO:**

Como se puede colegir del anterior acápite, para librar mandamiento de pago se debe verificar:

1. La demanda fue interpuesta en la jurisdicción y ante el juez competente;
2. El término para la presentación de la demanda no ha vencido;
3. La demanda formulada por el ejecutante cumple con los requisitos mínimos señalados en la ley;

---

<sup>10</sup> Aparte tomado del fallo de tutela del 3 de agosto de 2017, bajo el proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC)





4. Que el título judicial sea claro, expreso y exigible, esto es, i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo.
5. Si hay lugar al reconocimiento de intereses.

- **DE LA JURISDICCIÓN Y DEL JUEZ COMPETENTE:**

En el presente asunto, El artículo 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la ejecución de condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero, consagra lo siguiente:

**"ARTÍCULO 299.**

\*\*\*

*Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento."*

Según la regla de competencia por razón del territorio consagrada en el numeral 9º del artículo 156 del C.P.A.C.A, *"En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva"*.

Es claro entonces que en vigencia del C.P.A.C.A, será competente para la ejecución de las condenas impuestas por esta jurisdicción a una entidad pública, el mismo juez que profirió la respectiva providencia.

Conforme a lo anterior, Despacho es competente para asumir el conocimiento de la presente ejecución toda vez que el título en que se fundamenta la obligación reclamada está constituido, precisamente, por una providencia judicial emitida por esta misma célula judicial. Es decir, la competencia del Despacho para conocer el *sub lite* se deriva haber conocido el proceso ordinario donde se expidió el título a reclamar.

- **CADUCIDAD:**

El literal k) artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 señala que, para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del proceso ejecutivo de títulos derivados del contrato estatal, de decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso



administrativa en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales del estado, se consagró un término de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

El Despacho dilucidará el conteo de términos para establecer si la acción se encuentra caducada. Para ello tendrá en cuenta que la demanda fue presentada el 12 de febrero de 2021, mientras que la ejecutoria de la sentencia de condena ocurrió el 06 de agosto 2015.

A partir de lo anterior, deberá tenerse en cuenta el término adicional previsto en el artículo 192 inciso 2 del CPACA, según el cual *"Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada"*.

Así, pues, si la ejecutoria de la condena exigida tuvo lugar el 6 de agosto de 2015, en adición de los 10 meses que la entidad ejecutada tenía como plazo para proceder con el pago, se tiene que la exigibilidad de la obligación, junto con el inicio del conteo de caducidad respectivo, empezaba el 7 de junio de 2016.

La actora podía presentar la demanda hasta 5 años después, esto es, el 7 de junio de 2021. De manera que, si el líbello fue presentado el 12 de febrero de 2021, el Despacho concluye que la demanda fue oportuna.

- **LA DEMANDA FORMULADA POR EL EJECUTANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SEÑALADOS EN LA LEY:**

Conforme a las cesiones de crédito antecedidas, el Despacho observa que el cedente ostentaba la titularidad del crédito en ambos contratos, por lo tanto, como quiera que la sociedad ALIANZA FUDICIARIA S.A. funge como último y actual cesionario del crédito en cuestión, esta entidad se encuentra legitimada en la causa por activa, por ser transferidos en su cabeza los derechos económicos de los beneficiarios de la condena impuesta a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en la sentencia objeto de ejecución.

El respectivo poder otorgado al apoderado judicial de la parte demandante, viene soportado con el Certificado de Existencia y Representación de rigor que da cuenta de que la otorgante –la doctora Tatiana Andrea Ortiz Betancourt- en efecto contaba con facultades de representación de la entidad, por lo que podía conferir poder a su nombre.

Por su parte, la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por ser la condenada en la sentencia objeto de ejecución.



La demanda también cumple con los requisitos establecidos en los artículos 82 y subsiguientes del CGP, esto es, la designación del juez, nombre y domicilio de las partes, nombre del apoderado, las pretensiones, los hechos fundamento de las pretensiones el poder, la sentencia título de ejecución, la constancia de ejecutoria de la precitada providencia, la solicitud de pago, la respuesta dada por la entidad ejecutada, y la dirección electrónica del apoderado de la parte ejecutante.

- **QUE EL TÍTULO JUDICIAL SEA CLARO, EXPRESO Y EXIGIBLE, ESTO ES, I) QUE HAYA UNA OBLIGACIÓN DETERMINADA O DETERMINABLE; II) LA PARTE EJECUTANTE ACREDITE QUE LA OBLIGACIÓN ESTÁ A SU FAVOR; III) SE TIENE CERTEZA DE QUIÉN ES EL DEUDOR; IV) TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO LEGAL O SE CUMPLIÓ LA CONDICIÓN SIN QUE EL DEUDOR CUMPLIERA CON LA OBLIGACIÓN QUE TENÍA A SU CARGO.**

En el caso concreto, la obligación es **EXPRESA**, pues se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa. Es decir, en la sentencia judicial se condenó a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar unas sumas de dinero a favor de los ejecutantes y se dispuso dar cumplimiento a la providencia dentro de los términos indicados en los artículos 192 y 298 del CPACA.

Es **CLARA**, pues sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, pues la efectividad de la obligación debe surtirla la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a favor de los demandantes por unas sumas y equivalencias determinadas, con sus correspondientes intereses corrientes y moratorios.

Es **EXIGIBLE** pues no depende del cumplimiento de un plazo o condición toda vez que la sentencia quedó ejecutoriada el 6 de agosto de 2015, la parte ejecutante solicitó el pago de la misma el 5 de noviembre de 2015 y transcurrió el plazo fijado en el artículo 192 del CPACA, para su cumplimiento, sin que se haya realizado el pago.

- **LOS INTERESES**

Ahora, en cuanto a los intereses moratorios se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 192 inc. 2, 3, 5 y el artículo 195 literal 4 del CPACA, de conformidad con los criterios que a continuación se señalan:

- Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para



tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

- Cumplidos los 3 meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En el presente asunto, la solicitud de pago fue radicada el 6 de noviembre de 2015, es decir, dentro del término de los tres meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia (6 de agosto de 2015). Por tanto, en este caso no cesó la causación de los intereses corrientes y moratorios.

Por lo anterior y una vez estudiada la presente demanda ejecutiva por el despacho, se evidencia que esta reúne los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes, del C.G.P. y contiene título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem, el despacho dando cumplimiento al Art. 430 del C.G.P. por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

### **III.- DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** en contra de la **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, por los siguientes valores:

- Para ALIANZA FIDUCIARIA S.A. sociedad que en el presente proceso actúa única y exclusivamente como (Administradora del FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA C\*C) al 100% de los derechos económicos atribuidos por el señor ORLANDO ZUÑIGA MOSQUERA Y OTROS, por concepto de perjuicios morales, la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$57.991.500) y por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$304.056.095,19).

**SEGUNDO:** Se **ADVIERTE** que las sumas ordenadas en los numerales anteriores serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.



**TERCERO: ORDENAR** a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **deberá cancelar las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

**CUARTO: NOTIFICAR** personalmente la presente providencia a la parte demandada **NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020. La notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje.

La parte demandante deberá remitir al correo electrónico [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co), dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, la constancia de remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, no se procederá por la Secretaría de esta Corporación a realizar la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

**QUINTO: RECONOCER** personería al abogado Jorge Alberto García Calume, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.020.738 y portador de la Tarjeta Profesional No. 59.988 del C.S.J, para actuar dentro de la acción ejecutiva en nombre y representación de la parte demandante, en los términos de los poderes conferidos.

***NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE***

Firmado electrónicamente SAMAI  
**OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT**  
**Magistrado**